La versión de los profesores prevalecerá en caso de conflicto con padres o alumnos

La nueva ley aprobada por el Gobierno regional da rango de autoridad a los docentes, que solo perderán la razón si se demuestra con pruebas que no la tienen

La palabra del profesor irá a misa hasta que se demuestre lo contrario. La nueva Ley de Autoridad Docente, cuyo anteproyecto fue aprobado ayer por el Gobierno regional, trata de reforzar la potestad de los maestros para resolver los conflictos en el aula o con los padres de alumnos, otorgando a su palabra la presunción de veracidad. Es decir, en caso de desacuerdo, la palabra de los profesores prevalecerá sobre la versión de los estudiantes o sus familias. El docente solo perderán la razón si quien no está de acuerdo con él consigue demostrar, con pruebas, que no se ajusta a la verdad. La presunción de veracidad queda recogida en el artículo 6 de la nueva ley, que ya ha sido remitida a la Asamblea Regional para su tramitación.

La normativa busca reforzar la potestad del profesor de cara a sus alumnos y los padres, y paliar así la pérdida de autoridad que se ha denunciado desde algunos sectores. De hecho, los docentes tendrán rango de autoridad en cuanto la ley entre en vigor, un estatus que no solo realza su superioridad entre la comunidad escolar, sino que también tiene consecuencias prácticas. El rango de autoridad permite a la fiscalía perseguir de oficio los delitos contra estos funcionarios públicos, lo que viene a reparar, argumentan los defensores de la normativa, la «indefensión» que dicen padecer los docentes en casos de agresiones o denuncias falsas por parte de los alumnos o sus padres. Además, las sanciones o responsabilidades penales que pueda acarrear un conflicto aumentan cuando la víctima es una autoridad. El estatus de superioridad es equiparable al que ostentan las fuerzas de seguridad o el personal sanitario, y en la práctica los profesores ya lo disfrutaban porque así lo han reconocido varias sentencias.

Aunque la norma cuenta con el visto bueno del Consejo Jurídico y ha sido debatida en foros como el Consejo Escolar de la Región de Murcia, la Mesa Sectorial de Educación y la Comisión de Directores, algunas asociaciones de padres y sindicatos de profesores han expresado en varias ocasiones su rechazo al texto porque, consideran, «rompe el diálogo equilibrado y deja indefensas a las familias, ya que su palabra pierde todo su valor», valoró en su día la FAPA-RM, quien comparte con los sindicatos Sterm y Comisiones Obreras la tesis de que «la autoridad no se consigue por decreto, la gana el profesor que puede atender a sus clases con medios y recursos». El sindicato Anpe, impulsor de la norma, valoró ayer «muy positivamente la ley. El profesor debe encontrar ahora el término medio entre el autoritarismo que conocieron las generaciones anteriores y la actual tendencia a la relajación total, para que la permisividad sin control no degenere en impunidad».

Reparación de daños

La responsabilidad de los alumnos de los colegios e institutos que provoquen daños en las instalaciones o a sus compañeros o maestros queda también concretada en el

articulado, que remarca la obligación de los estudiantes de reparar esa lesión «o hacerse cargo del coste económico. Asimismo deberá restituir los bienes sustraídos o reparar económicamente el valor». En caso de agresión física o moral, se da también a los alumnos oportunidad de enmendar el daño: «La petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos por parte del agresor, o su inexistencia, serán consideradas como circunstancias atenuantes o agravantes». La normativa marca, de alguna manera, un antes y un después en las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar, y se inspira en las redactadas en los últimos años en comunidades como Valencia o Madrid, donde el debate ha estado también salpicado por la polémica.

LOS ARTÍCULOS MÁS TRASCENDENTES

Protección Jurídica del docente:

Artículo 5. Autoridad.

1. «Los docentes, así como los directores y demás miembros de los equipos directivos, tendrán, en el ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y disciplinarias que tengan atribuidas, la condición de autoridad docente».

2. «Los docentes de centros públicos y privados concertados tendrán, en el ejercicio de esas mismas potestades de gobierno, docentes y disciplinarias, la condición de autoridad pública, gozando de la protección y asumiendo la responsabilidad atribuidas a tal condición por el ordenamiento jurídico. Esta condición solo será aplicable a los docentes que posean nacionalidad española».

Artículo 6. Presunción de veracidad: «Los hechos constatados por los docentes, así como por los directores y demás miembros de los equipos directivos, en el ejercicio de sus funciones, gozarán de presunción de veracidad, cuando se formalicen por escrito en documento que cuente con los requisitos que por la Consejería competente en materia de educación sean establecidos reglamentariamente, sin perjuicio de las pruebas o informes que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan ser aportadas. Cuando la aplicación de este artículo produzca alguna colisión de derechos, se resolverá atendiendo al orden jerárquico de los implicados y a las atribuciones propias de la Inspección de Educación».

Artículo 9. Responsabilidad y reparación de daños: «El alumnado que, de forma individual o colectiva, cause, de forma intencionada o por negligencia, daños a las instalaciones, equipamientos o cualquier otro material del centro educativo, así como a los bienes de los miembros de la comunidad educativa, quedará obligado a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento. Asimismo, deberá restituir los bienes sustraídos o reparar económicamente el valor de estos».

<http://www.laverdad.es/murcia/v/20121110/region/versin-profesores-prevalecer-caso-20121110.html#opina>